



**ESQUERRA
REPUBLICANA**

GP ESQUERRA REPUBLICANA
Carrera de San Jerónimo, 40, 6a pl.
28071 Madrid
Centraleta. Telf. 91 390 59 95
c/e: administracio@gperc.congreso.es
Prensa. Telf. 91 390 56 87
c/e: premsa@gperc.congreso.es

A LA MESA DEL CONGRESO DE LOS DIPUTADOS

El Grupo de **ESQUERRA REPUBLICANA**, a instancia de su Diputado **Joan Tardà i Coma**, al amparo de lo establecido en el artículo 193 y siguientes del Reglamento de la Cámara, presenta la siguiente **PROPOSICIÓN NO DE LEY sobre la necesidad de evaluar la participación española en la guerra, ocupación y reconstrucción de Iraq** para su debate en la Comisión de Asuntos Exteriores

Congreso de los Diputados, octubre de 2016

Joan Tardà i Coma

Portavoz

GP Esquerra Republicana

Exposición de motivos

En julio de 2016 se ha hecho público el informe Chilcot, encargado por el Gobierno británico, sobre la participación del Reino Unido en la guerra de Iraq, donde se analiza cómo se decidió la intervención militar y cómo se gestionó la posterior ocupación.

En este mismo sentido, la Comisión de Asuntos Exteriores de esta Cámara, en su sesión del día 29 de noviembre de 2006, aprobó con modificaciones una propuesta del Grupo Parlamentario de ERC en que se instaba al gobierno a “realizar un informe sobre la participación militar española en Iraq (que incluya necesariamente un desglose económico de las funciones realizadas en materia de cooperación y actuación comercial)”. No obstante, el gobierno español no cumplió con este mandato parlamentario.

Todas las informaciones e investigaciones con las que contamos trece años más tarde del inicio de la guerra y ocupación ilegal e ilegítima contra el Estado soberano de Iraq con el apoyo del gobierno español del momento confirman que no había pruebas que justificaran el principal argumento utilizado para dicha guerra: la existencia de armas de destrucción masiva por parte de Iraq. Es más, las investigaciones apuntan a que los posibles indicios al respecto eran fruto de la manipulación y la mentira de la foto de las Azores, y especialmente del Presidente del Gobierno español, que aparece en ellas como un verdadero entusiasta de la guerra aún sin confirmar la existencia de las armas de destrucción masiva.

A pesar de todo esto, el Parlamento español no ha realizado ningún tipo de análisis o investigación respecto a los fundamentos que llevaron a participar a España en una guerra, que sólo apoyó parlamentariamente el partido del Gobierno, ni existe ningún informe oficial respecto a la participación española: las misiones exactas que las tropas españolas movilizadas iban a llevar a cabo, qué tipo de coordinación existía con las demás tropas ocupantes, ni siquiera el dinero total que comportaba dicha movilización.

Por otro lado, tampoco se aclaró nunca ante este Parlamento cuáles eran las contrapartidas que el Estado español iba a obtener de una guerra hecha para apoderarse del petróleo iraquí y del negocio de la reconstrucción y de la privatización de los servicios públicos iraquíes. En este sentido, es necesario recordar que ya desde antes de iniciarse la guerra, el entonces secretario de Estado de Comercio y Turismo, Juan Costa, hacía gestiones para garantizar la participación de las empresas españolas en la reconstrucción hasta el punto

que Fernando Díez Moreno, secretario de Estado de Defensa y comisionado español para Iraq, afirmó ante el Comité Hispano-Iraquí de Cámaras de Comercio que “hay un especial deseo de EEUU para que España participe en la reconstrucción” como contrapartida por el apoyo a la guerra. Tal era el “optimismo” en tal sentido que, el 13 de mayo, el gobierno del PP prometió a las empresas españolas una cuota de participación del 9%, que significaba un volumen de negocio de alrededor de 6.000 millones de euros.

No obstante, ninguna de las empresas españolas ganó las subcontrataciones ofrecidas por las empresas de EEUU beneficiadas por la USAID, hecho que molestó al gobierno del PP, que mediante el ministro de Defensa Federico Trillo, trasladó a Donald Rumsfeld su malestar por la exclusión de España del botín de guerra.

Respecto a la AOD comprometida, tampoco se llegó a clarificar nunca cuál fue el montante de ayuda total a Iraq por parte del gobierno español, cómo fue implementada y cuál fue el proceso de selección de las ONGs que se hicieron cargo de ella.

En este mismo sentido, el gobierno español tampoco aclaró ni la forma ni destino de los 300 millones de dólares anunciados por el gobierno español en la Conferencia de Donantes de Madrid para la reconstrucción iraquí (qué parte era ayuda y para qué proyectos concretamente, qué parte era ayuda ligada y bajo qué condiciones, qué parte era gasto militar o de infraestructuras, etc).

Asimismo, este Parlamento tampoco ha recibido información respecto a qué se debía la misión de los servicios de espionaje españoles en Iraq y que fueron atacados (y muertos) por las tropas iraquíes que luchaban contra la ocupación.

Ante todos los datos expuestos y después de la intensa y multitudinaria movilización que realizó la sociedad contra esta guerra, se considera oportuno informar a este Parlamento para que tenga elementos de valoración y evaluación de la participación española en la guerra con el objeto de que extraiga las oportunas conclusiones.

Por todo ello se presenta la siguiente

PROPOSICIÓN NO DE LEY

El Congreso de los Diputados insta el gobierno español a

1. Crear una Comisión de Evaluación de la participación española en la guerra, ocupación y reconstrucción de Iraq, al amparo del artículo 22 de la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público (o el artículo 40 de la Ley 6/1997 en caso de que sea antes de su entrada en vigor). Dicha Comisión estará compuesta por 28 miembros designados por los Grupos Parlamentarios del Congreso de los Diputados. Cada Grupo designará a 4 miembros, uno para cada uno de los grupos de análisis (político, militar, comercial y de cooperación internacional).
2. Establecer, en su creación la finalidad de que la Comisión realice un informe, en el plazo máximo de 9 meses, sobre la decisión de apoyar la guerra de Iraq y la evaluación de la participación española en Iraq. La Comisión deberá organizarse en 4 grupos de trabajo para realizar un detallado informe sobre los siguientes ámbitos:
 - 1) político: respecto a los fundamentos sobre los que se decide la participación militar española y sobre la información que tiene el Gobierno español para justificar la intervención y sobre la gestión de dicha información ante los medios de comunicación y la opinión pública;
 - 2) militar: respecto a la participación militar española y de los servicios de espionaje, que incluya necesariamente las funciones encomendadas y realizadas y un detallado desglose económico;
 - 3) Ayuda Oficial: detallando los compromisos adquiridos, la AOD finalmente destinada y ejecutada, tipo de ayuda (y en particular, si hubo ayuda ligada), evaluación de la finalidad y destino de la AOD y los proyectos realizados, así como de las organizaciones que se responsabilizaron de ella.
 - 4) comercial: sobre las negociaciones y los compromisos comerciales públicos y privados del Estado español, de la Administración y las empresas públicas y de las empresas privadas, tanto en la ocupación militar como en la reconstrucción del país devastado (detallando aquellos proyectos o contratos conseguidos).

3. Enviar dicho informe a la Comisión de Asuntos Exteriores del Congreso de los Diputados. Los Grupos Parlamentarios podrán solicitar, en el plazo de quince días, cuanta información adicional consideren necesaria y que será remitida al Congreso de los Diputados en un plazo no superior a un mes. Los Grupos Parlamentarios, en el plazo de un mes desde la recepción de la totalidad de la información, harán cuantas propuestas de resolución consideren oportunas y que serán votadas, en los siguientes quince días hábiles, en la Comisión de Asuntos Exteriores junto al Informe de la Comisión.